

EDITORIAL

El terremoto un factor más de agudización de la crisis económico-social

El terremoto del 10 de Octubre provocó un efecto devastador en la ciudad de San Salvador y municipios aledaños. Se estima que más de 1,500 personas murieron, más de 10 mil fueron heridas y cerca de 300 mil resultaron damnificadas; unas 23 mil viviendas quedaron destruidas totalmente, mientras que 30 mil sufrieron daños de consideración, una gran cantidad de edificios públicos y privados fueron dañados; dos edificios se desplomaron completamente; la infraestructura de servicios públicos básicos para la población se dañó considerablemente y su servicio se interrumpió por varios días; escuelas y hospitales sufrieron también los efectos desastrosos del terremoto.

Este nuevo factor, que afecta esencialmente el centro del poder económico y político, se convierte en un elemento más tendiente a agudizar el ya deteriorado proceso económico, social y político que a lo largo del año no había presentado síntomas de recuperación o mejora.

Ciertamente, a lo largo de 1986 la guerra se había intensificado, los operativos y bombardeos de la Fuerza Armada y los ataques y sabotaje por parte del FMLN se habían recrudecido provocando muerte y destrucción. El diálogo entre las fuerzas insurgentes y el gobierno había fracasado; Sesori lugar de la tercera ronda de diálogo, había quedado como una esperanza frustrada para el reinicio de una solución política, a un conflicto que lleva ya más de seis años.

Por otra parte, las medidas económicas implementadas en enero, las cuales estaban contenidas en el programa de estabilización y reactivación económica, no habían logrado los frutos que se esperaban, los desequilibrios económicos se acentuaban dramáticamente afectando esencialmente a las mayorías populares. La inflación había alcanzado una tasa de 33% hasta septiembre, el déficit fiscal seguía creciendo y solamente el desequilibrio del sector externo parecía el único aspecto positivo a lograr este año, debido a las condiciones coyunturales favorables de los altos precios del café en el mercado internacional y los bajos precios del petróleo.

En este contexto de crisis y de guerra el deterioro en las condiciones de vida de los sectores populares se había profundizado, la respuesta ante esta situación por parte de los sectores laborales había sido la constitución de la Unidad Nacional

de Trabajadores Salvadoreños (UNTS) como una acción organizada a fin de rechazar las medidas del programa económico; las huelgas, paros, denuncias, plataformas reivindicativas eran el marco esencial de la agitación laboral ante el deterioro de los salarios reales.

Unos días antes del terremoto el poder ejecutivo a través del presidente de la República había presentado un nuevo paquete de reformas tributarias, las cuales tendrían como objetivo cubrir las necesidades de la guerra a través de un nuevo impuesto de "emergencia" —impuesto de soberanía—, nuevas tasas impositivas a la renta y el patrimonio, así como un conjunto de impuestos indirectos. La empresa privada había dado una negativa al nuevo paquete de impuestos y se preparaba para dar una respuesta articulada al gobierno desde sus institutos políticos y sus estructuras gerenciales representativas.

Durante el año las críticas de la empresa privada al gobierno se habían caracterizado por acusaciones a la corrupción, a la implementación de políticas inefectivas y a la cada vez mayor injerencia del gobierno en la actividad económica.

En este marco de crisis, guerra y conflictos político-sociales, el terremoto puso nuevamente en evidencia los graves problemas estructurales, sobresaliendo la marginación de las grandes mayorías populares. San Salvador se ha convertido a lo largo de estos últimos años, en el lugar de concentración de gran cantidad de población que desplazada de las zonas conflictivas busca trabajo y seguridad en la ciudad.

Se calcula que actualmente viven en San Salvador, alrededor de 1,500,000 personas; y que el 60% de las familias del área metropolitana de San Salvador reciben ingresos inferiores a \$500 mensuales. La mayor parte de estas familias de San Salvador habitan en viviendas arrendadas, muchas de éstas endeblemente construidas; una proporción importante se ubica en mesones, zonas marginales y colonias ilegales con los problemas de insalubridad y hacinamiento derivados de ello.

"Miles de familias en las barrancas salieron a la luz en esos seis segundos en toda su dolorosa realidad", dijo el presidente Duarte ante la Asamblea General de la Naciones Unidas, expresando así las deficiencias de un modelo económico que ha prevalecido favoreciendo a una minoría de la población en detrimento de las grandes mayorías.

El terremoto suscitó una diversidad de respuestas; el gobierno actuó con relativa agilidad a la emergencia, integrando hábilmente a la empresa privada a las actividades de recolección y distribución de la ayuda; la comunidad internacional envió flujos cuantiosos de donaciones y las instituciones humanitarias, iglesias, etc., respondieron también con ayuda material y monetaria.

El gobierno norteamericano, preocupado por los efectos devastadores del terremoto, efectuó una lectura inicial del fenómeno considerando que este podría ser aprovechado por el movimiento revolucionario, ante la eventualidad de un aumento del descontento popular en contra del régimen.

Ante esta nueva situación, la Administración Norteamericana canalizó rápidamente ayuda económica y material, y se encargó de convencer a la comunidad de la OCDE (Países más desarrollados del bloque occidental) e instituciones financieras internacionales de orientar en el corto plazo ayuda hacia El Salvador.

Por su parte el FMLN decretó una tregua unilateral y la Fuerza Armada replegó sus recursos a San Salvador —militarizando la ciudad—, mientras la iglesia católica

y los sectores populares afirmaron que tras el terremoto, la guerra era más absurda que nunca.

Después de varios meses de ocurrido el terremoto, queda claro que la crisis político-militar continúa constituyendo el gran límite de cualquier medida para reactivar la economía o para reconstruir la nación. En este contexto la política económica ha mostrado incoherencias y ha enfrentado todo tipo de oposición. La ineffectividad de algunas medidas enunciadas y otras implementadas para ayudar a los damnificados del terremoto confirman aquella aseveración.

Ante esta problemática hemos considerado conveniente señalar algunos elementos necesarios a tomar en cuenta en un verdadero proceso de reconstrucción. El primero, coherente con la visión anterior, es partir de una solución al conflicto a través del diálogo y la negociación, esto porque ningún proceso de reconstrucción puede viabilizarse si existe un factor que provoca destrucción y un gasto con fines no productivos. El segundo es la necesaria participación de los sectores populares en la formulación e implementación de las políticas de reconstrucción y, el último, que las mayorías populares participen en la discusión sobre las formas y mecanismos de financiamiento más adecuados para la reconstrucción, a fin de evitar aquellas medidas que tiendan a empeñar más nuestra soberanía nacional, que provoquen mayores presiones inflacionarias o que hagan más regresivo el financiamiento público.

En general el terremoto con sus efectos ha evidenciado nuevamente las deficiencias del modelo económico social y político, su irracionalidad e injusticia; pero al mismo tiempo ha planteado un reto para los distintos sectores en la búsqueda e implementación de un nuevo modelo de economía y sociedad en función de los sectores más humildes del país.